

NACIONES UNIDAS

Asamblea General

CUADRAGESIMO SEXTO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

COMISION POLITICA ESPECIAL
21a. sesión
celebrada el jueves
14 de noviembre de 1991
a las 15.00 horas
Nueva York

ACTA TAQUIGRAFICA DE LA 21a. SESION*

Presidente: Sr. SCHAFFER (Alemania)
(Vicepresidente)

SUMARIO

TEMA 75 DEL PROGRAMA: CUESTIONES RELATIVAS A LA INFORMACION

TEMA 37 DEL PROGRAMA: POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA

* Publicada de conformidad con la decisión adoptada en la 21a. sesión.

Representación de los Estados miembros

Distribución de los documentos de la Comisión Política Especial

El presente documento se distribuye en español, francés, inglés y portugués. Los documentos en otros idiomas se distribuirán a petición de los interesados.

El presente documento se distribuye en español, francés, inglés y portugués. Los documentos en otros idiomas se distribuirán a petición de los interesados.

Distr. GENERAL
A/SPC/46/PV.21
29 de noviembre de 1991
ESPAÑOL

Se abre la sesión a las 15.25 horas.

TEMA 75 DEL PROGRAMA

CUESTIONES RELATIVAS A LA INFORMACION

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Deseo llamar la atención de los miembros sobre una nota del Secretario General, de fecha 11 de noviembre de 1991, que ha sido distribuida como documento A/SPC/46/3.

TEMA 37 DEL PROGRAMA

POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Respecto a este tema, que se examinará directamente en sesión plenaria, la Asamblea General decidió que se permitiera que organizaciones e individuos especialmente interesados en la cuestión del apartheid fueran escuchados por la Comisión Política Especial. En su segunda sesión, el 7 de octubre, la Comisión decidió fijar el 31 de octubre como plazo límite para la presentación de solicitudes de audiencia y examinar, en una sesión previa a las audiencias, todas las solicitudes que se hubieran recibido hasta esa fecha límite. Posteriormente la Comisión en su 20a. sesión, celebrada el 8 de noviembre aprobó las solicitudes de audiencia contenidas en los documentos A/SPC/46/L.4 y Addenda 1 a 5.

Propongo que, siguiendo la práctica de otros años, la Comisión solicite actas literales de estas audiencias. No veo objeción.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Pido a todos los oradores que intervengan en las audiencias sobre este tema que limiten sus observaciones a la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica.

Doy la palabra en primer lugar al Sr. Pheko, del Congreso Panafricanista de Azania.

Sr. PHEKO (interpretación del inglés): Es un privilegio para mí dirigirme a la Comisión Política Especial.

Si bien crece la euforia y cunde la impresión de fraude en cuanto a la seriedad del régimen sudafricano respecto a un cambio fundamental en Sudáfrica, y aunque personas que pretenden estar comprometidas con el desmantelamiento del apartheid y con la destrucción del colonialismo estén presentando todo tipo de excusas por mantener relaciones con Sudáfrica, los hechos revelan que los cambios son puramente superficiales y que no sirven para desmantelar el apartheid. En realidad, la situación se va tornando peligrosa no sólo para los africanos colonizados de Sudáfrica sino también para los Estados de la línea del frente y, en último término, para el resto de Africa.

El 11 de noviembre de 1991, durante una visita a Israel del Sr. F. W. De Klerk y de su Ministro de Relaciones Exteriores, Sudáfrica firmó un acuerdo amplio sobre vínculos económicos y científicos con Israel. Hoy es ya un secreto a voces que Israel ha estado ayudando a Sudáfrica a desarrollar una capacidad nuclear.

Ahora se pide a los oprimidos que se abstengan de utilizar términos tales como "régimen de Pretoria" y "régimen racista, colonialista", porque existe un pretendido cambio en Sudáfrica. Algunos declaran que la cuestión de los africanos colonizados en Azania ya no se debe debatir dentro de los temas relacionados con el colonialismo y la "libre determinación" porque esto no es "pertinente" a la situación de Sudáfrica. Esta forma de pensar y este enfoque son absolutamente equivocados en el último decenio del siglo XX. Sin embargo, los movimientos de liberación nacional y las organizaciones políticas en Azania siguen llamando régimen al supuesto gobierno o autoridades, porque el régimen sudafricano sigue siendo racista y colonialista y representa a la minoría, y porque la mayoría de la población africana indígena sigue aún bajo un gobierno extraño y sin derecho al sufragio.

Permítaseme que presente algunos hechos que siguen obstinadamente sucediendo en Sudáfrica.

Las acciones y declaraciones del Sr. F. W. De Klerk, de su Ministro de Relaciones Exteriores y de otros funcionarios del régimen indican claramente que el régimen se opone al gobierno de la mayoría - una persona, un voto - y que es partidario de perpetuar bajo disfraz el gobierno colonial de la minoría racista.

El régimen se ha negado absolutamente a cumplir la Declaración de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1989 (resolución S-16/1). Según la Comisión de Derechos Humanos en Sudáfrica, en relación con los juicios y presos políticos, hubo 476 juicios políticos y 2.659 acusados hasta septiembre de 1991. Se llevaron a cabo 689 juicios políticos en el Estado Libre de Orange, 122 en Natal, 96 en Northern Cape, 57 en Western Cape y 130 en los bantustanes, los llamados territorios patrios. El número total de presos por razones de "seguridad" fue de 250, y el de presos por "desorden" fue de 1.200, lo que lleva a un total de 1.450 presos políticos. En la lista de condenados a muerte en Sudáfrica hay 333 personas.

En 1990, 16 personas murieron diariamente en Sudáfrica de tuberculosis (TB). La tuberculosis ha sido llamada la enfermedad del apartheid porque cunde donde las personas viven hacinadas y en malas condiciones.

El régimen está publicando avisos en Europa en los que solicita inmigrantes a quienes promete oportunidades lucrativas y derechos de ciudadanía. Esos inmigrantes son más racistas que los propios racistas del apartheid. Algunos se han unido al ejército del régimen. El régimen también ha concedido ciudadanía inmediata a mercenarios de Angola, Mozambique y Namibia. Asimismo, ha empleado y ha desplegado a esos peligrosos asesinos que trabajan con el ejército sudafricano contra mujeres y niños desarmados e indefensos.

No se puede negar que en nuestro país ha habido una escalada sin precedentes de la violencia, la que ha sido instigada y patrocinada por el régimen sudafricano principalmente para mantener la supremacía blanca, que se traduce en el colonialismo y el apartheid. La violencia genocida de los blancos contra los negros, que se está presentando como de negros contra negros, la lleva a cabo el régimen a través del Batallón Koevoet, basado en Moordkop en el Transvaal Septentrional, del Batallón Buffalo 32; de los Selous Scouts que provienen de la antigua Rhodesia de Ian Smith; y de elementos de la RENAMO.

Ello, además, le esterilizar a las mujeres africanas y de alentar a los askaris infectados con el virus del SIDA para que duerman con mujeres africanas a fin de que la enfermedad cunda entre los africanos y se reduzca su población. El 31 de octubre de 1991 el Johannesburg Sowetan reveló que:

"De acuerdo con un estudio internacional sobre tendencias demográficas, un holocausto causado por el SIDA podría despoblar Sudáfrica y llevar al caos económico y social. A fines de 1995, hasta 12,8 millones de personas en Sudáfrica podrían estar infectadas con el virus del SIDA. ... A pesar de pruebas contundentes de que el SIDA puede despoblar Sudáfrica, las autoridades se niegan a enfrentar esta realidad."

En Sudáfrica, los civiles blancos poseen 2,5 millones de armas. Cualquier blanco mayor de 18 años puede poseer hasta 28 armas compradas en el comercio. Además, Sudáfrica ha importado 20 toneladas de armas de los Estados Unidos de América, según el Fondo de Acción para rechazar la invasión, el colonialismo y el apartheid (Fondo AFRICA) que está basado en Nueva York. El año pasado 10.000 africanos fueron asesinados y este año mueren 15 diariamente.

La escala de genocidio a la que han estado muriendo los africanos ha instado al Presidente del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), Clarence Makwetu, a preguntar:

"¿Durante cuánto tiempo será el pueblo oprimido y desposeído de Azania el único que visita cementerios con monótona regularidad? Espero que ustedes me respondan."

Tres partes firmaron el Acuerdo de Paz el 14 de septiembre de 1991, pero a fines de ese mismo mes más de 200 africanos habían sido asesinados. Al firmar el Acuerdo de Paz el dirigente y Presidente del PAC, Clarence Makwetu, advirtió sobre las actividades de pistoleros anónimos que están masacrando africanos a voluntad. La posición del PAC se ha visto justificada por las masacres que han ocurrido desde la firma del Acuerdo de Paz.

Ahora deseo hablar sobre los crímenes del apartheid. El régimen se ha negado a otorgar una amnistía general a los auténticos presos políticos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados no ha logrado obtener del régimen una amnistía general para los exiliados políticos. Por ello, los exiliados no tienen la garantía de que, si regresan, no serán procesados. Debo señalar que hace tan solo una semana uno de ellos fue asesinado misteriosamente después de haber regresado al país. A muchos dirigentes del PAC no se les ha permitido volver incondicionalmente a su propio país.

El PAC rechaza el punto de vista de que quienes han cometido el crimen del apartheid, un crimen de lesa humanidad, pueden ahora reclamar el dudoso derecho de otorgar indemnidad a las víctimas del apartheid. Insistimos en que, si el régimen tiene buenas intenciones, debe declarar una amnistía general que no haga sufrir a nuestro pueblo la afrenta de interrogatorios y clasificaciones. En todo caso, la auténtica indemnidad sólo la pueden otorgar las víctimas del apartheid a los que han cometido ese crimen. Es ridículo que este régimen reclame ese derecho.

Mientras los africanos están siendo masacrados y mueran como moscas, mientras los funerales y los lamentos son cotidianos, mientras el 50% de los niños mueren antes de los seis años y 36 personas mueren de tuberculosis cada día, mientras existe una pobreza extrema y casi 2 millones de niños no tienen educación, se pide al mundo que se centre en cuestiones de lujo. Los blancos de Sudáfrica pueden ahora venir y jugar al rugby, al tenis y otros deportes de élite mientras los africanos son víctimas de la pobreza, la enfermedad y la ignorancia. Algunos no tienen techo y sólo comen una vez al día. Esas víctimas del apartheid no tienen prioridad sobre los blancos a quienes se debe dar la oportunidad de que jueguen al rugby a nivel internacional. ¿Qué moralidad es ésta? ¿Qué lógica es ésta? ¿Qué justicia es ésta? ¡Qué maravilla es el nuevo orden mundial que se predica pero no se practica!

El PAC sostiene que debe mantenerse el boicot a los deportes. Quienes desean jugar al tenis y al rugby y participar en los Juegos Olímpicos también deben preocuparse de que se establezca una nueva Constitución aceptada por la mayoría africana autóctona. No puede haber un deporte normal en una sociedad anormal, y los africanos no pueden vivir de promesas sino que tienen que vivir de acuerdo con la realidad concreta de su situación. El PAC ha sostenido que, cuando el contingente sudafricano participe en los deportes internacionales, cantará el himno colonialista del apartheid e izará la bandera del apartheid, lo que demostrará que el apartheid está vivo y coleando en Sudáfrica.

Por supuesto, sabemos que harán trampa y evitarán tocar ese himno e izar esa bandera. De hecho, ya planean hacerlo con el propósito de engañar al mundo. De hecho, casi sin excepción los participantes serán blancos. Sam Ramsay, el Jefe del Comité Olímpico de Sudáfrica, sabe muy bien que levantar el boicot a los deportes no favorece a los africanos sino que beneficia a la minoría blanca.

El levantamiento de sanciones y otras medidas en general es considerado por la mayoría de los africanos como un engaño y un obstáculo para el desmantelamiento del apartheid y el fin del colonialismo.

Por supuesto, la lucha africana por la liberación nacional y la autodeterminación no empezó con la imposición de sanciones. Esa lucha noble no terminará con el levantamiento de las sanciones. De hecho hay una presión creciente entre el pueblo africano, especialmente entre los jóvenes, para que la lucha armada sea redoblada. La STAR recientemente pidió al Presidente Makwetu, del PAC, que solicite al Azanian People's Liberation Army que deponga las armas. Eso fue después de que muchos policías y soldados blancos fueron muertos por las guerrillas del PAC. Por supuesto es muy extraño que los periódicos hagan este llamamiento sólo después que murieron unos cuantos blancos armados de las fuerzas de seguridad del régimen, pero no cuando miles de africanos morían cada día.

El régimen de De Klerk removió aspectos legislativos de las leyes relativas a la propiedad de la tierra, de 1913, y de la Ley sobre zonas reservadas, de 1936, y las enmendó con la Ley de inscripción de la población. Se recordará que la Comprehensive Anti-Apartheid Act de los Estados Unidos pedía concretamente que se derogasen todos los pilares legislativos del apartheid como condición para que los Estados Unidos levantaran las sanciones federales.

Pero ¿qué significa esto para los africanos oprimidos y desposeídos? Los africanos reconocen de hecho que el colonialismo y la dominación racista han dejado el 87,3% de la tierra en manos de la minoría blanca, la cual representa sólo el 13% del total de la población.

¿Por qué se revocaron las leyes relativas a la propiedad de la tierra? Los blancos pueden conservar esa vastedad de tierras con esa legislación. Los africanos no tienen voto ni dinero. No pueden comprar tierra en ninguna parte, porque la legislación complementaria estipula que el propietario de una tierra no puede disponer de sus bienes sin el consentimiento de sus vecinos o de la comunidad. Esto impone la "autodeterminación de los intereses de la comunidad", lo cual significa que se mantiene el statu quo con respecto a la tierra y la segregación residencial.

La Ley de inscripción de la población, considerada uno de los pilares del apartheid, no ha sido derogada. Según los denominados nuevos arreglos, los niños nacidos después del 25 de junio de 1991 no serán clasificados racialmente. Pero los que nacieron antes de esa fecha sí están registrados. Esas personas quedarán clasificadas racialmente hasta que una nueva constitución democrática no racial entre en vigor.

En 1990 el régimen de Sudáfrica revocó la Ley de instalaciones separadas, pero las instalaciones continúan separadas. Se han privatizado. Ha sido introducida lo que torpemente se ha llamado la "autodeterminación de la comunidad". Esto significa que los blancos deben aceptar en cada residencia que los africanos utilicen las instalaciones. Como es conocido, esto se aplica a las escuelas y a la propiedad en virtud de la Ley sobre zonas reservadas.

La remoción de los denominados pilares del apartheid no ha cambiado fundamentalmente el status quo de los africanos oprimidos y pobres desposeídos. El régimen sudafricano está utilizando la revocación superficial de las leyes del apartheid para mejorar su imagen internacional y conquistar la simpatía y el apoyo de los países occidentales, en particular de los que están considerados como sus respaldos tradicionales. El régimen ha logrado engañar al Presidente Bush, de los Estados Unidos de América, para que levante las sanciones impuestas en virtud de la Comprehensive Anti-Apartheid Act. Las acciones de De Klerk han llevado a que los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea recomienden que se levanten las sanciones.

Sobre la cuestión crucial de quién ha de elaborar la nueva constitución, se han presentado numerosas posiciones o sugerencias. El régimen propuso una conferencia multipartidaria para debatir la nueva constitución. Los participantes en esta llamada conferencia multipartidaria serán invitados por el régimen sobre la base de un probado apoyo. Esto significa que todas las partes que no representen a votantes viables, no podrán participar en esta conferencia. El propósito de esta conferencia multipartidaria es llenar a la mesa de negociaciones con toda suerte de personas, pero sobre todo de elementos no representativos que apoyan o están al servicio del régimen racista minoritario. Una reunión así no tendrá mucho éxito en la elaboración

de una constitución o en la estipulación de principios fundamentales que reconozcan la regla de la mayoría basada en un voto por persona. El PAC ha rechazado esta fórmula multipartidaria calificándola como no democrática y a favor del régimen minoritario.

El PAC considera que la nueva constitución debe ser redactada por representantes elegidos democráticamente. Por lo tanto, ha presentado una fórmula democrática para el establecimiento de una asamblea constituyente como mecanismo para elaborar la nueva constitución. Esta asamblea constituyente debería ser elegida sobre la base de un voto por persona, y todos los azanianos deben tener derecho al voto si son mayores de 18 años. Ya existen en el apartheid sudafricano listas separadas de votantes; entonces es posible tener una lista común de votantes en tres meses.

La estrategia del régimen ha sido hablar individualmente con los representantes de los oprimidos, la táctica típica de los colonialistas de "divide y vencerás". El llamado del régimen a una conferencia multipartidaria es parte de esta estrategia. La escalada de violencia que se inició el 2 de febrero de 1990 fue patrocinada por el régimen para menoscabar los movimientos de liberación nacional y la unidad de los oprimidos.

Deben efectuarse negociaciones genuinas y serias entre el régimen y los representantes del Frente Patriótico. El PAC y otras organizaciones de oprimidos han demandado una autoridad de transición que incluya a la autoridad internacional, como las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana. El régimen no puede ejercer la soberanía en nuestro país. Esa "soberanía" fue usurpada a través de la colonización y la agresión. La manipulación del derecho internacional que se ha visto en Sudáfrica para engañar al mundo en el sentido de que Sudáfrica no es una colonia no ha engañado al pueblo desposeído de Azania como para hacerle aceptar este fraude colonial gigantesco y esta falacia del siglo en Africa.

El camino hacia adelante no será obstaculizado y nadie permitirá ser intimidado por quienes siguen sirviendo, no por mucho tiempo, a los intereses del apartheid y del colonialismo en Sudáfrica, sino que por el contrario defenderán sus propios intereses.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Doy ahora la palabra a la Sra. Beatrice von Roemer, de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres.

Sra. von ROEMER (interpretación del inglés): En nombre de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, que representa a más de 100 millones de trabajadores de 102 países, quiero expresar nuestro agradecimiento por brindarnos, una vez más, la oportunidad de manifestar nuestra opinión sobre la situación en Sudáfrica.

En los últimos dos años hemos sido testigos de un movimiento extraordinario en favor de la libertad en muchas partes del mundo. Hemos visto que regímenes represivos y atrincherados se desplomaron como castillos de naipes. Naciones que sufrieron la ocupación extranjera, por tanto tiempo que el mundo prácticamente las había olvidado, ahora están recobrando su independencia y se sientan en estos salones. Sin embargo la cuestión del apartheid sigue presente en el programa de las Naciones Unidas y continúa siendo una preocupación principal del movimiento internacional de sindicatos libres.

Ciertamente se han alcanzado importantes progresos en este ámbito. No lo negamos. Pero aunque aplaudimos la abolición de la legislación del apartheid, estamos convencidos de que estos pasos, por significativos que sean, sólo representan la eliminación de una fachada, que deja en su lugar e intacta la estructura básica y la vida de la gente afectada. ¿Cómo podemos hablar seriamente de un cambio irreversible cuando vemos que los ciudadanos negros en Sudáfrica todavía hacen fila para votar por un gobierno no escogido por ellos? Mientras no haya una constitución que les garantice este derecho, la presión internacional tiene que seguir. Encontramos que es muy difícil creer que el Gobierno de Sudáfrica esté dispuesto a negociar de buena fe. Hay demasiadas revelaciones en cuanto a la participación de organismos gubernamentales en actos de violencia, en ataques de la extrema derecha y en acciones desestabilizadoras, así como en la financiación gubernamental de operaciones encubiertas contra las fuerzas democráticas anti-apartheid.

La reciente imposición unilateral por el Gobierno del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que supone un aumento del 3% al 5% en los precios de los alimentos básicos, no es un buen indicio de un compromiso auténtico de crear una Sudáfrica justa y democrática y de corregir los errores del apartheid. Por el contrario, ese impuesto, en su forma actual, reestructura efectivamente la economía sudafricana sacando el dinero a los consumidores y utilizándolo para aliviar los impuestos de las grandes empresas. Los grupos de bajos ingresos del país - las auténticas víctimas del apartheid - son los más afectados.

La Confederación Internacional de Sindicatos Libres y sus afiliados han presentado este año numerosas peticiones ante las autoridades sudafricanas instándoles a negociar y consultar de forma democrática respecto a la imposición del IVA. La huelga general de la semana pasada, convocada por las dos federaciones sindicales, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) y el Consejo Nacional de Sindicatos (NACTU), en la que participaron 3.500.000 personas, con lo que se convirtió en la mayor huelga que nunca haya tenido lugar en Sudáfrica, podría servir para que la comunidad internacional no olvide el constante desprecio de Pretoria hacia la voluntad de la población mayoritaria del país. Jay Naidoo, Secretario General del COSATU, describió la huelga como "un devastador voto de censura contra este Gobierno".

Otra lucha que libran las federaciones sindicales democráticas en Sudáfrica se refiere a la ampliación de los derechos laborales a los trabajadores del campo y a los empleados públicos y domésticos. Hay negociaciones en curso en cuanto a los empleados públicos y domésticos, pero el Gobierno sigue tratando de excluir a los trabajadores del campo de la Ley de relaciones laborales. Su situación es particularmente grave. Una misión realizada en mayo de 1990 por el ICFTU, junto con la International Federation of Plantation, Agricultural and Allied Workers Union, encontró que están mal pagados y mal tratados. La atención sanitaria es mínima o inexistente, las condiciones de las viviendas son desastrosas y el trabajo infantil, aunque está prohibido, es general. La última Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió a todos sus miembros que garantizaran que la legislación laboral de Sudáfrica se atuviera al menos a las normas de la OIT y observó que, por principio, la legislación debe cubrir plenamente

a los trabajadores del campo, a los empleados domésticos y a los empleados públicos.

Durante años el ICFTU ha ayudado a los trabajadores negros a crear sindicatos fuertes y democráticos y a superar el hostigamiento y la persecución a que eran sometidos por el régimen de apartheid. La persecución aún no ha terminado. El mes pasado cuatro dirigentes del COSATU, Jay Naidoo, Sydney Mafumade, Moses Mayekiso y Baba Schalk, fueron condenados por secuestro y asalto. Se basaron para ello en un incidente ocurrido en agosto de 1990 en que miembros del COSATU aprehendieron a un hombre, que resultó ser un agente de la policía, que se comportaba de forma sospechosa en las cercanías de la sede del COSATU; lo detuvieron hasta que se celebrara una conferencia de prensa.

El ICFTU emitió una declaración oficial diciendo que "la persistencia del Gobierno sudafricano en seguir adelante con este juicio político a pesar de las fuertes protestas del movimiento de sindicatos libres internacionales era un intento deliberado de menoscabar el progreso hacia negociaciones auténticas para crear una nueva Sudáfrica democrática."

La declaración seguía diciendo:

"Esta embestida contra los dirigentes del COSATU puso de manifiesto la doblez del régimen sudafricano cuando declara que desea asegurar una solución negociada y pacífica."

Recientemente, como consecuencia de las revelaciones sobre la financiación del Inkatha, quedó al descubierto una organización antisindical organizada de forma encubierta por la policía. El Financial Mail reveló que en 1989 se había creado una consultoría laboral basada en la Ran Afrikaans University para luchar contra actividades "indeseables" del COSATU y del NACTU. El COSATU declaró que esto llevaba a preguntarse de nuevo sobre otros sucios trucos antisindicales, incluido el asesinato de sindicalistas y la destrucción de numerosas instalaciones sindicales, durante años. El Ministro de Ley y Orden admitió la existencia de ese órgano, pero dijo que se había disuelto en julio.

En julio de este año, en una Conferencia panafricana propiciada conjuntamente por el ICFTU y su organización afiliada, la Federación de Sindicatos de Bostwana, se presentaron informes de los sindicatos democráticos

de Sudáfrica, representados por el COSATU y el NACTU. En ellos se pidió el mantenimiento de todo tipo de sanciones contra Sudáfrica hasta que exista una nueva constitución que garantice la imposibilidad de volverse atrás. La Conferencia apoyó su petición de que se celebrara una asamblea constituyente para negociar el futuro de Sudáfrica. Una vez terminadas las negociaciones y concertada una nueva constitución, ésta no podría ser objeto de veto por parte del electorado blanco.

Por ello, el ICFTU, en línea con la posición expresada por los trabajadores negros, representados por sus sindicatos democráticos, sigue pidiendo el mantenimiento de las sanciones y deplora profundamente la prisa actual por recompensar a Sudáfrica prematuramente. Las sanciones han sido eficaces para lograr el cambio. Deben mantenerse hasta que Sudáfrica tenga una constitución que garantice una auténtica democracia y justicia política, económica y social para todo su pueblo. Sólo entonces estaremos seguros de que no habrá vuelta atrás.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Concedo ahora la palabra al Sr. Joseph D. Reilly, de la Asociación de Bibliotecarios Progresistas de los Estados Unidos de América.

Sr. REILLY (interpretación del inglés): Antes de leer mi intervención quiero dar lectura a una declaración de la Library and Information Worker's Organisation (LIWO), de Sudáfrica, que fue creada para reemplazar a la Librarian Information Organization, organización racista patrocinada por el Estado:

"Desde 1989 han ocurrido cambios importantes en Sudáfrica. Las protestas y la resistencia bajo el estado de emergencia en el decenio de 1980 culminaron con la autoproclamación a finales de 1989 por parte de las organizaciones del movimiento de liberación del fin de su prohibición. La presión internacional, una crisis de legitimidad y las derrotas militares llevaron a De Klerk a su respuesta del 2 de febrero de 1990, por la que se puso fin a la prohibición de las organizaciones y, según el Gobierno del Partido Nacional, se declaró la muerte del apartheid.

En los meses siguientes se abolieron algunas leyes del apartheid, y hoy, tanto a nivel nacional como internacional, se habla de una 'nueva' Sudáfrica.

La Ley de instalaciones separadas, que prohibía a los negros la utilización de las bibliotecas públicas controladas por las autoridades locales y sancionó el establecimiento de instalaciones de menor categoría en las barriadas, fue abolida a finales de 1990, lo que permitió a algunos decir que las bibliotecas públicas estaban abiertas a todo el mundo.

Pero para la mayoría de los sudafricanos que quieren leer para recreo o con fines educativos, oficiales o no, el acceso gratuito a una biblioteca pública sigue siendo difícil cuando no imposible.

La mayoría de las bibliotecas públicas están situadas en los suburbios blancos o en el centro de las ciudades y sólo atienden a las necesidades de grupos privilegiados, es decir, blancos, empleados, residentes urbanos y educados. Están físicamente alejadas de los lugares de trabajo y residencia de la mayoría de los sudafricanos y sus existencias son de poca importancia. Además, esas instalaciones están controladas y financiadas por autoridades locales - todavía segregadas - que sirven a los intereses de los contribuyentes. En casos extremos, prohíben el uso de las instalaciones a los residentes de las barriadas próximas con la excusa de que no pagan tasas a la autoridad pertinente.

En ciertas zonas de Natal, los bibliotecarios piden pruebas de residencia tales como facturas de electricidad, para tomar en cuenta la solicitud de los clientes negros a formar parte de la biblioteca. Esto es difícil de presentar para los residentes de barriadas que no tienen electricidad o para los que han participado en boicoteos de servicios o viven en habitaciones subarrendadas. En otras zonas, se ha impuesto una tasa anual prohibitiva, con lo que se impide efectivamente que muchos pobres accedan a la información. Y hay todavía otras zonas en que se ha fijado un tope al número de miembros para evitar que las instalaciones se vean inundadas por los lectores locales de las barriadas. Se han producido situaciones en que los residentes de las barriadas negras que se las han arreglado para viajar a las ciudades para ir a la biblioteca,

se han estrellado con otros obstáculos a la hora de tomar libros prestados. Todo esto es indicio de la amplitud de los mecanismos utilizados para preservar los privilegios de los blancos.

Es evidente, pues, que el apartheid sigue bien vivo. La mayoría de los sudafricanos no tiene derecho a voto. La discriminación racial ha penetrado en todos los resquicios del funcionamiento de la sociedad sudafricana, a nivel político, social y religioso, produciendo un sistema burocrático y social que llevará decenios destruir. La persistencia de la educación bantú, por ejemplo, garantiza que millones de niños negros continúen luchando por una educación con escuelas inadecuadas, sin maestros, sin libros, sin plumas, sin lápices, sin papel, sin equipo de laboratorio, sin campos de juego, sin equipos deportivos y sin bibliotecas.

La Library and Information Worker's Organization (LIWO) se inició en Natal en 1990 y en El Cabo occidental en 1991, justamente para atender las necesidades de información de los sudafricanos en el contexto de una historia de limitaciones represivas y discriminatorias en el intercambio de información y opinión. Seguimos comprometidos en definir nuestro trabajo a fin de promover una mayor participación sociopolítica y económica. Para hacerlo hemos establecido contacto con organizaciones progresistas de educación y cultura, de estructuras cívica y política, que trabajan en ámbito del gobierno local. El desequilibrio en asignaciones de bibliotecas y de recursos en Sudáfrica en general debe ser atacado en su raíz, esto es en relación con el equilibrio de recursos económicos, políticos y poder.

Por consiguiente, pedimos a la comunidad internacional que se resista a la tentación de proclamar prematuramente la desaparición del apartheid y que interprete la era de De Klerk de modo realista. Para la mayoría de los sudafricanos la 'nueva' Sudáfrica sigue impregnada de la anterior. No estamos seguros de que sea posible un cambio fundamental en el presente sistema, en que sigue atrincherado el privilegio, dada la persistencia del actual equilibrio del poder. Como trabajadores de bibliotecas e información comprometidos con ideales democráticos reconocemos la relación entre información y poder, y hemos definido nuestro trabajo en términos de poder del individuo y de la comunidad como contribución a la concreción de la democracia en Sudáfrica. Pedimos a la comunidad internacional de trabajadores de bibliotecas e información, y a los asistentes a bibliotecas cuyas vidas se enriquecieron por el libre acceso a la información de todo el mundo, que respalden nuestro pedido de reconocimiento de los siguientes derechos humanos en Sudáfrica: derecho a libre información y opinión; derecho a servicios de biblioteca pública libres y accesibles; derecho de los niños a aprender y desarrollarse en un contexto de educación libre apoyada por adecuadas bibliotecas escolares." Esa es la declaración de la LIWO de 12 de noviembre de 1991.

El año pasado dije a esta Comisión que datos, documentación, información y conocimiento eran los instrumentos para revelar las actividades criminales en Sudáfrica y en el Africa meridional. Hoy tengo la intención, como trabajador de la información, de actualizar a la Comisión a este respecto.

Ha sido un año trascendental en la lucha en Sudáfrica. Con sacrificio y trabajo arduo, el pueblo sudafricano ha creado un pequeño pero muy significativo espacio dentro del que puede funcionar. En su búsqueda de una democracia estable, próspera y no racista, el pueblo sudafricano concedió al Gobierno la confianza necesaria para tener un diálogo cordial. Pero el régimen del apartheid abusó de todas las disposiciones de la confianza en toda oportunidad posible.

La política de los bantustanes continúa sin cesar, con la esperanza de que estas entidades artificiales puedan negociarse una por una. Aun a estas alturas, el régimen está dando tierras a ese tergiversado territorio llamado Bophuthatswana, bajo el mando de su marioneta, Mangope. Es increíble que sea necesario expresar una vez más ante esta Comisión que no hay entidad tal como Bophuthatswana, que ciudades como Mafikeng y Rooigrond son ciudades sudafricanas, que sus habitantes son sudafricanos, que la Prisión Bop Central en Rooigrond es una cárcel sudafricana, y que los mártires como Rabusang Monnana fueron valientes luchadores por la libertad sudafricana que murieron a manos de autoridades sudafricanas. Pediría también a la Comisión que se envíe copia de estas declaraciones al Subsecretario de Estado Herman Cohen y al Presidente Bush de los Estados Unidos de América, que parecen incapaces de proclamar esta realidad.

El mundo ha visto con horror las matanzas que han tenido lugar en el país, que ha habido más asesinatos de líderes de los movimientos de liberación en el pasado año y medio que en el decenio anterior, y cómo el régimen ha negado con audacia su obvia complicidad frente a cientos de declaraciones juradas, testigos oculares, informes parlamentarios, películas de oficiales de Estado tomando parte activa en tales crímenes y documentación oficial de todo ello que muestra claramente una estrategia planeada y ordenada de desestabilización interna frente a la lucha popular por una democracia no racista.

Las revelaciones de este verano demostraron que Inkatha y la United Workers Union of South Africa (UWUSA) son aliados y agencias de las autoridades sudafricanas que no podrían sobrevivir sin las armas, el entrenamiento militar y el apoyo logístico, político y material provisto por el Estado a expensas de los contribuyentes. Pero Inkatha y UWUSA son sólo

unos pocos componentes de una mayor estrategia de desestabilización. Sabemos sin duda que el Batallón 32; Koevoet; 5° Regimiento de Reconocimiento; 2° Regimiento de Reconocimiento; RENAMO; antiguos miembros de la Oficina de Cooperación Civil; pandillas como Amisinyora, Black Cats y Three Million Gang; la policía KwaZulu al mando de Jack Buchner, y, por supuesto, varias unidades de la policía sudafricana, todos están actuando en el país para generar un clima de intimidación masiva y terror. Un documento interno del Servicio Nacional de Inteligencia ejemplifica cuán seriamente se está llevando a cabo la campaña contra el Congreso Nacional Africano (ANC) y sus aliados. Se ocupa de cómo manejar al ANC, paso a paso, llevándolo a una posición de debilidad para forzar a su liderazgo a transigir en principios básicos, intimidando al pueblo que claramente apoya al ANC y sus aliados. Todo esto se hace con el objetivo de fijar condiciones durante el proceso de negociación.

Además, Sudáfrica continúa interfiriendo en asuntos de naciones soberanas de la región.

En Namibia hay una campaña de sabotaje económico, con transferencia artificial de capital, para eliminar el liderazgo de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) en los próximos comicios. Las actuaciones de The Tender Board y del Sr. W. W. Greef son de particular interés a este respecto. Además, individuos como Riaan D. Lange y Anna Vorster parecen estar trabajando para el Servicio Nacional de Inteligencia desde la misión diplomática sudafricana en Windhoek; Louis Van Niekerk, Louis Vandenberg y otros del Departamento de Inteligencia Militar probablemente trabajan en pro de los mismos repugnantes objetivos de desestabilización.

En Angola es bien sabido que Sudáfrica está minando activamente las elecciones angoleñas y trata de llevar a Jonas Savimbi al poder por todos los medios posibles. Las continuas violaciones del espacio aéreo de Botswana por parte de aviones de transporte Hércules C-130 que abastecen militarmente a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), la construcción de una pista de aterrizaje cercana a la base del Batallón 32 en el Cabo septentrional, el establecimiento en París de una agencia de inteligencia llamada Interaction International - encabezada por Mike Wells y Phillipe Bohn - todo nos prueba que el proceso angoleño de pacificación es atacado por aquellos elementos responsables del terror infinito y de la destrucción, que llevaron el proceso de pacificación a primer plano.

En otras partes, se acusa a Sudáfrica de enviar vehículos militares al corrupto régimen del Zaire. Y en su intento por hegemonizar la región, los militares han decidido intervenir en otra guerra no convencional, esta vez en Uganda.

Por último, es importante señalar la existencia de muchos informes acerca del comercio ilícito de armas en el área cercana a las fronteras con Mozambique y Swazilandia. Además, prolifera el comercio ilícito de marfil, que genera importantes fondos para la RENAMO y unidades de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas de Defensa Sudafricana.

Huelga decir que Sudáfrica no actúa sola en asuntos de injerencia externa. Por ejemplo, así como es verdad que el Gobierno financió y administró la United Workers Union of South Africa, debe también señalarse que hay fuertes sospechas y profusa documentación de que el National Endowment for Democracy (NED) de los Estados Unidos también estuvo implicado. Créditos del NED No. 91-51, aprobado el 22 de marzo de 1991, por 110.000 dólares; No. 90-100, aprobado el 8 de junio de 1990, por 200.000 dólares, y No. 89-116, aprobado el 15 de septiembre de 1989, son una muestra del dinero tomado de confiados contribuyentes de los Estados Unidos que envían los llamados dirigentes sindicales a las arcas de la Federación Sindical Histadrut en Israel.

Sin embargo, Israel no es la única nación en el Oriente Medio que respalda a Sudáfrica. Durante la guerra del Golfo, la Arabia Saudita compró toda la producción de Sudáfrica de proyectiles de 155 mm. Igualmente, los Emiratos Arabes Unidos encargaron 50 cañones móviles G6 a Sudáfrica. Evidentemente, el resultado neto de estas transacciones ha sido un gran beneficio para el régimen sudafricano.

Las organizaciones privadas de extrema derecha siguen interfiriendo a nivel regional. La International Freedom Foundation; Freedom, Incorporated; Morton Blackwell y las organizaciones miembros del Council for National Policy; Pat Robertson y una serie de empresas cristianas evangélicas de extrema derecha; la Hans Seidel Foundation y la Konrad Adenauer Foundation en Alemania, y, por supuesto, la Heritage Foundation. Esta es sólo una pequeña lista de la constelación de organizaciones privadas y semiprivadas que apoyan el terror y la desestabilización en toda la región.

De los muchos gobiernos y organizaciones que han invertido tiempo y recursos para causar el caos en el Africa meridional, merece especial mención Kenya. El apoyo material, la protección diplomática y el entrenamiento militar que Kenya ha prestado a la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) es una desgracia. Las Naciones Unidas, así como las naciones del mundo entero, consideran que la RENAMO es una organización terrorista responsable de la muerte de más de un millón de personas en Mozambique y cuyas tácticas humanitarias incluyen "hervir a niños vivos delante de sus padres". El papel de Kenya en el Comité Conjunto de Verificación que supervisa las negociaciones entre la RENAMO y el Gobierno de Mozambique es apenas una excusa para permitir a Kenya ser más abierta en su larga relación con la RENAMO. El hecho de que tal apoyo continúe, incluso después de que Kenya firmase un comunicado en la cumbre del Commonwealth pidiendo que se ponga fin a todo tipo de apoyo a la RENAMO, descubre una política completamente cínica que no puede tener ningún valor estratégico positivo para los intereses de Kenya.

Nada de la información que he compartido con la Comisión proviene de una cámara secreta o ha sido adquirida mediante la infiltración de algún organismo. La mayoría deriva de fuentes de información accesibles, tales como periódicos, revistas, documentos gubernamentales publicados y otros similares. Aún más, a pesar de la intensa desestabilización, las naciones

afectadas de la región, así como las comunidades afectadas en Sudáfrica, siguen concentradas en el objetivo de la estabilidad, la paz y una democracia no racial. Por lo tanto, la Comisión Política Especial no debería encontrar demasiado difícil la elaboración de recomendaciones que detengan la interferencia en los asuntos de Estados soberanos en el Africa meridional y que fomenten y respalden al pueblo en luch de Sudáfrica. Es completamente vital que las Naciones Unidas continúen desempeñando un papel activo en Sudáfrica y en el Africa meridional. El hecho de que esta Comisión continúe celebrando estas audiencias es tanto un reconocimiento del hecho de que el apartheid sigue siendo el mayor obstáculo para la democracia no racial y la estabilidad regional y de que las Naciones Unidas siguen comprometidas con los pueblos de Sudáfrica y del Africa meridional.

He presentado algunas recomendaciones a la Comisión Política Especial. No deseo que la Comisión pierda más tiempo leyéndoles esas recomendaciones. Quizá la Comisión pueda examinarlas en sus deliberaciones.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Doy la palabra al Sr. David A. Ridenour, de The National Centre for Public Policy Research.

Sr. RIDENOUR (interpretación del inglés): Agradezco la oportunidad de hablar ante esta Comisión sobre un tema muy importante: la situación del apartheid en Sudáfrica.

No parece que exista entre los grupos sudafricanos una opinión uniforme sobre la situación del apartheid. El Congreso Nacional Africano (ANC) continúa afirmando que el apartheid sigue vivo y coleando y que muchos de los cambios que se han realizado en los dos últimos años han sido meramente superficiales. Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en que el apartheid está muerto y enterrado. Ninguna de estas dos afirmaciones son completamente ciertas. Efectivamente, mientras la ley sudafricana niegue a la mayoría del pueblo el derecho de participar en pie de igualdad en las políticas electorales, el apartheid seguirá existiendo. Pero si el apartheid no está muerto y enterrado, al menos está en su lecho de muerte. Durante los dos años en que el Sr. F. W. De Klerk ha sido Presidente del Estado sudafricano, las estructuras del apartheid, que el Gobierno tardó años en erigir, se han desmoronado.

Resulta oportuno realizar un examen de las reformas hechas en los últimos 12 meses:

Primero, el año pasado no sólo se han derogado la Development Trust and Land Act, de 1936, la Black Land Act, de 1913, y la Black Community and Development Act, de 1984, sino también la Ley sobre zonas reservadas de 1936 y la Ley de inscripción de la población de 1950. La derogación de las dos últimas estaba entre las condiciones estipuladas por la propia Ley comprensiva contra el apartheid, de los Estados Unidos para que el Presidente de los Estados Unidos pudiera levantar todas las sanciones de los Estados Unidos, algo que hizo hace algunos meses.

Segundo, ha comenzado el proceso de negociación en Sudáfrica. El Gobierno sudafricano ha entablado activamente negociaciones desde 1990 con el Congreso Nacional Africano (ANC) para la creación de un sistema político nuevo y multirracial. Algunos dirigentes del ANC siguen aduciendo que las reuniones con funcionarios gubernamentales sólo tienen el fin de discutir los términos de las negociaciones. Pero según la definición del diccionario Oxford del idioma inglés, negociación es la "acción o empresa de negociar o concertar con otros". En otras palabras, debatir los términos de las negociaciones constituye de por sí una negociación. Hay que añadir a esto el hecho de que se han firmado acuerdos entre el Gobierno y el ANC, entre otros, incluyendo la minuta de Groote Schuur, la minuta de Pretoria y, más recientemente, el Acuerdo de Paz Nacional. El propio ANC anunció hace poco que participará en una conferencia de todas las partes a fines de este mes.

Tercero, el Parlamento sudafricano promulgó en junio una ley enmendando la Ley de seguridad interna. La ley imponía límites estrictos a la detención de sospechosos de terrorismo, eliminaba restricciones sobre publicaciones e individuos y ponía fin al inmenso poder del Gobierno para prohibir las organizaciones.

Cuarto, en marzo, el Gobierno convino que los exiliados que tenían formación militar podían solicitar y recibir indemnidad para volver a Sudáfrica. Se esperaba que esto afectara al 80% de los exiliados del ANC. Hasta el 30 de abril de este año ya se habían aprobado 4.500 solicitudes de indemnidad.

Quinto, se ha liberado a todos los presos políticos de Sudáfrica. El proceso de liberación de los presos políticos concluyó el 30 de junio gracias a un acuerdo entre el Gobierno sudafricano y el ANC.

Aunque se ha progresado mucho para eliminar el sistema de apartheid de los libros de derecho, Sudáfrica tiene todavía una importante labor que completar. Es decir, la negociación de un nuevo decreto constitucional que permita a todos los sudafricanos, con independencia de la raza, participar en pie de igualdad en las políticas electorales. Sólo entonces el apartheid podrá enterrarse. Pero incluso esto no significa que los problemas de Sudáfrica se hayan terminado.

Una de las mayores tragedias de Sudáfrica ha sido el número de muertes en las barriadas populares. Según algunos cálculos, en los últimos cinco años han muerto más de 6.000 negros en enfrentamientos entre el movimiento Inkatha del Jefe Buthelesi y el Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela. Aún más han muerto a causa de enfrentamientos violentos entre el ANC, el Congreso Panafricanista de Azania (PAC) y el Movimiento popular de Azania. Las sanciones internacionales han desempeñado un papel en esta tragedia.

Las sanciones internacionales y la confusión económica que implican para los trabajadores negros han ayudado a crear un terreno propicio para el cultivo de la violencia. Han hecho estragos entre los jóvenes negros sudafricanos, a los que a menudo se refieren los medios de difusión como "la generación perdida de Sudáfrica". Muchos jóvenes negros no tienen hogares estables, debido en gran medida a las dificultades económicas familiares, y no pueden obtener trabajo debido a la crisis económica originada por las sanciones. Algunos han recurrido al delito, en ocasiones al delito violento. Al igual que sus semejantes desvalidos en los centros urbanos de todo el mundo industrializado, algunos han recurrido a pandillas de delincuentes para mejorar económicamente y para tener cierta sensación de pertenencia. La pandilla de elección durante el período de mediados del decenio de 1980 era el ANC.

Por supuesto, el ANC estaba ansioso por acoger a los nuevos miembros. En el decenio de 1980, al fracasar por no poder retar militarmente en forma adecuada al Gobierno, el ANC decidió hacer a Sudáfrica - según sus propias palabras - "ingobernable". Para ello no necesitaba un cuadro de miembros bien disciplinados y políticamente comprometidos. Para fomentar la anarquía, los miembros de la "generación perdida" lo harían muy bien.

Esto nos lleva al problema que tenemos hoy: la violencia aparentemente interminable. Creo a Nelson Mandela cuando dice que desea que cese la violencia, y que cese inmediatamente. La otra alternativa es que él la esté alentando de forma activa, algo que yo no creo. El hecho es que durante el decenio de 1980 el ANC reclutó gente indisciplinada y decidida a generar anarquía, y eso es precisamente lo que tienen actualmente. El Sr. Mandela es incapaz de poner fin a la violencia porque no controla a los miembros del ANC, y mucho menos a los miembros del Inkatha.

La respuesta al problema de la violencia en Sudáfrica es una mejor educación y mejores oportunidades de empleo para los jóvenes sudafricanos. Debemos ayudar a la generación perdida a encontrar su camino. Quienes tienen un empleo y han cubierto sus necesidades económicas básicas, son menos propensos a los actos de violencia o el extremismo. Pero no se logrará una mejor educación ni mejores condiciones de empleo sin el regreso de la inversión y la industria extranjeras.

Insto a las Naciones Unidas y a esta Comisión a que ayuden a poner fin a la matanza alentando a los Estados Miembros a levantar las sanciones restantes.

Esta medida estaría de acuerdo con las condiciones que las Naciones Unidas fijaron para el levantamiento de sanciones internacionales.

En diciembre de 1989 las Naciones Unidas estipularon cinco condiciones para levantar las sanciones internacionales contra Sudáfrica. Estas incluían:

Primero, la legalización de todos los grupos políticos proscritos y el derecho de todos los grupos políticos a organizarse, hacer manifestaciones, etc. Esta condición se cumplió plenamente en febrero del año pasado al levantar las prohibiciones que pesaban sobre más de 60 grupos opuestos al apartheid, incluido el ANC, el Partido Comunista Sudafricano, la Organización Popular de Azania y el Congreso Panafricanista, entre otros.

Segundo, la puesta en libertad de todos los presos políticos. Ya se cumplió con esta condición, por lo menos a satisfacción del Congreso Nacional Africano. El 30 de junio, el ANC convino en que el proceso de liberación de los presos había terminado. Algunos dirigentes opuestos al apartheid incluso creen que el Gobierno ha ido demasiado lejos en la liberación de presos. Durante una visita reciente a Washington, D.C., Helen Suzman, luchadora opuesta al apartheid durante mucho tiempo, dijo que creía que muchos de los presos liberados son una verdadera amenaza a la seguridad pública en Sudáfrica.

Tercero, la finalización del estado de emergencia. Esta condición se cumplió en junio, con el mejoramiento de la Ley de seguridad interna. El año pasado se levantó el estado de emergencia que existía en todo el territorio sudafricano.

Cuarto, la finalización de todos los juicios y ejecuciones por motivos políticos. Esta condición también se ha cumplido. Con la solución de la cuestión de los presos políticos, el levantamiento de las prohibiciones de

las actividades políticas, el fin del estado de emergencia y la enmienda de la Ley de seguridad interna, la cuestión de los juicios políticos es ampliamente debatible. Si bien el plazo que se le dio al Presidente De Klerk para la moratoria temporal de las ejecuciones terminó a comienzos de este año, en la práctica sigue en efecto. La suspensión de las ejecuciones es la norma del día.

Quinto, el retiro de todas las tropas de las barriadas populares. Según el Gobierno, la presencia de tropas de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica era necesaria en las barriadas populares debido a la violencia política interna entre el Congreso Nacional Africano y el movimiento Inkatha. En efecto, la Comisión Independiente Sudafricana de Derechos Humanos informó recientemente que entre julio de 1990 y junio de 1991 3.180 personas fueron asesinadas y aproximadamente 7.000 resultaron heridas debido a esa violencia. El año pasado, el propio Nelson Mandela dijo en la televisión, en el programa Nightline, de la cadena ABC, que "Ningún gobierno del mundo puede tolerar una violencia en la que han muerto casi 4.000 personas", sin intervenir en ella. En septiembre, el Gobierno, el ANC e Inkatha firmaron un acuerdo general para tratar esta violencia política. El acuerdo estableció directrices concretas de comportamiento no sólo para los grupos políticos sino también para las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica (FDS) y la policía. El hecho de que el Congreso Nacional Africano haya aceptado directrices concretas de comportamiento para las tropas de las FDS que operan en las barriadas populares representa una aprobación tácita por el ANC de la presencia de las FDS en esos lugares. Por lo tanto, también se ha cumplido con esta condición.

Las Naciones Unidas deben cumplir su palabra y pedir a todos los Estados Miembros que levanten las sanciones.

Probablemente no necesito decirles lo que los negros sudafricanos piensan sobre las sanciones internacionales. En los 10 últimos años ha habido docenas de encuestas de opinión pública que demuestran que la gran mayoría de los negros se opone a las sanciones. Por ejemplo, en una de las encuestas más recientes, llevada a cabo por la muy respetada organización Gallup, se demostró que el 76% de los encuestados - incluido el 68% de los encuestados que apoyaban al ANC - se oponía a las sanciones económicas. El motivo de su oposición es claro: ellos han pagado el precio más alto por las sanciones.

El Ministro de Coordinación Económica de Sudáfrica, Dr. Dawie de Villiers, informó recientemente que de 1983 a 1991 la tasa de desempleo de Sudáfrica se elevó del 10% al 17%. Francamente, algunos analistas ponen en entredicho la veracidad de esas estadísticas. Creen que el desempleo es en realidad mayor. Dado que los negros constituyen el 80% de los desempleados, actualmente hay más de 2 millones de negros sin trabajo en Sudáfrica, incluso utilizando las estadísticas optimistas del Dr. de Villier. Sólo del 3% al 4% de los desempleados son blancos.

¿Cuál es la diferencia entre 1983 y 1991? Las sanciones internacionales y la falta de inversiones. En el decenio de 1980, antes de la imposición de la mayoría de las sanciones, la economía sudafricana estaba creciendo a un ritmo suficiente como para emplear a las personas que ingresaban al mercado laboral, y la mayor parte de las personas que ingresaban al mercado laboral por primera vez eran negros. Lamentablemente, durante el decenio de 1980, sólo el 25% de quienes ingresaron al mercado laboral encontraron empleo.

Muchos de los trabajadores negros en Sudáfrica no sólo sostienen a su propia familia sino también a las de sus hermanos. El impacto económico de la pérdida de trabajo para un negro puede repercutir hasta en cuatro familias. Millones de negros sudafricanos sufren: no tienen alimentación, vivienda, educación ni atención médica adecuadas.

Las Naciones Unidas deberían optar por una postura humanitaria y moral y pedir a todas las naciones que levanten las sanciones contra Sudáfrica ahora.

Les agradezco por haberme brindado la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablarles sobre este tema tan importante.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Cedo ahora la palabra a la Sra. Salisha Evans, representante de la organización Jóvenes contra el Apartheid.

Sra. EVANS (interpretación del inglés): Con mucha humildad y orgullo me dirijo a este órgano. Elogio a esta Comisión por sus incansables esfuerzos por mantener el tema del apartheid de Sudáfrica en este órgano y en el mundo. Sus esfuerzos han reflejado la conciencia del hombre civilizado.

Nací un año y 10 días después del 16 de junio de 1976. Como sabrán, el 16 de junio de 1976 es una fecha que quedó marcada indeleblemente en la conciencia colectiva del mundo. Ese día fatal murió la inocencia.

Niños, que siempre han representado las esperanzas y las aspiraciones de la humanidad, se convirtieron trágicamente en víctimas del odio, víctimas de la opresión, víctimas del apartheid. Los niños inocentes de Soweto se convirtieron en tropas de la línea del frente en la batalla por el alma de su país. Desde entonces, los niños de Sudáfrica no han descansado de esa guerra.

Generalmente, las guerras se han representado como dominio exclusivo de adultos. Por lo menos se aparentaba proteger a los niños de sus garras. El 16 de junio de 1976 esta apariencia se abandonó. Los niños se convirtieron en los blancos escogidos del Estado de apartheid y, por lo tanto, pasaron de ser el pie de nota de la historia a ser los capítulos importantes. Al caer ante las balas, de sus gritos de angustia y sus sollozos de muerte nació el movimiento en contra del apartheid.

Hoy nos ponemos de pie en su honor y en honor de muchos héroes caídos en el precipicio de la victoria.

Veo los acontecimientos de Sudáfrica a través de los ojos de un niño de 14 años, estudiante de segundo año de la escuela secundaria. No pretendo saber ni entender las actuaciones de los adultos; pero siento el dolor, el aislamiento, la juventud perdida de los niños de Sudáfrica, las víctimas del apartheid. Me puedo imaginar la tristeza de no poder hacer las cosas simples que hacen los niños normales, como ir a la escuela con un amigo y gozar de la fortaleza de un padre y del cuidado de una madre, seguros en sus hogares y trabajos.

Me imagino las pesadillas de terror. Entiendo por qué los niños asumen el papel de los adultos en la lucha contra el apartheid. Entiendo por qué el futuro tiene que basarse en el derramamiento de la sangre de la juventud de hoy. El apartheid no es simplemente una guerra contra las madres y los padres. Sus víctimas no son sólo los viejos o los jóvenes. Por su naturaleza, el apartheid es una guerra total contra la humanidad. Sus víctimas son los jóvenes y los viejos, los justos y los injustos. Debido a que es tan opresivo e invasor, su aniquilación total se convierte en la obligación de todos los pueblos civilizados.

Si bien entiendo y acepto la necesidad de que los niños estén en el frente de esta batalla, me siento entristecido ante su sacrificio. Sigo sufriendo por ellos. Su sangre, su juventud y su futuro habrán valido la pena como terrible precio pagado sólo cuando el último vestigio del apartheid haya sido destruido y el aire puro de la libertad bese nuevamente de manera suave las mejillas de los jóvenes sudafricanos. Sólo entonces quedará reivindicada la inocencia de la niñez.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Concedo la palabra a la Sra. Gay J. McDougall, del Lawyers' Committee for Civil Rights under Law.

Sra. MCDUGALL (interpretación del inglés): Los acontecimientos en Sudáfrica se encuentran en una coyuntura crítica. Desde la declaración histórica del Presidente F. W. De Klerk, de Sudáfrica, en la inauguración del

Parlamento en enero de 1990, han ocurrido cambios significativos en ese país. Al examinar hoy esas reformas, en vísperas de negociaciones sustantivas entre el Gobierno sudafricano y los partidos de oposición, sin embargo, tenemos que llegar a la conclusión de que dichos cambios no pueden ser tildados de irreversibles o de profundos; todavía no.

Siguen en la cárcel cientos de presos políticos con pocas esperanzas de una pronta liberación. Continúan los juicios políticos y los arrestos por delitos políticos. Si bien la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR) concertó hace poco un acuerdo con el Gobierno sudafricano que permitirá la repatriación de decenas de miles de personas que están en el exilio, ese proceso se realizará en ausencia de una amnistía general requerida por la OACNUR en otros países. Muchos volverán a su hogar bajo una indemnidad parcial que no disipará sus temores de detención o de cargos desconocidos.

Los amplios poderes que continúan siendo autorizados por la Ley de seguridad interna y por la Ley de seguridad pública para controlar, suprimir y castigar ciertas formas de actividad política pacífica, siguen atemorizando a todos aquellos que desean una participación política.

Si bien la Ley sobre zonas reservadas ha sido derogada, ésta ha sido reemplazada por otra legislación que permitirá a las comunidades blancas locales tomar medidas que mantendrán el status quo en las comunidades racialmente segregadas. Asimismo, la derogación de las leyes relativas a la propiedad de la tierra de 1913 y 1936 tendrá muy poco impacto. La vasta mayoría de la población negra de Sudáfrica sigue desesperadamente pobre como resultado, fundamentalmente, de la operación de esas leyes, que no les proporcionan medios financieros para la compra de propiedades, que teóricamente se han puesto a su disposición. La Ley de inscripción de la población ha sido derogada, pero sus consecuencias serán aisladas y afectarán sólo a niños nacidos después de la fecha de la derogación: a ellos ya no se les clasificará de blancos, asiáticos, de color o africanos. Todos los demás en esta sociedad, sin embargo, mantendrán sus clasificaciones raciales y las importantes consecuencias jurídicas implícitas en tales clasificaciones. Aún más importante, a aquellos clasificados como africanos se les seguirá negando el derecho de votar.

Si bien está fomentando una imagen al exterior de dismantelar el apartheid y de participar de "buena fe" en las negociaciones, el Gobierno sudafricano ha estado llevando a cabo en secreto una campaña auspiciada por el Estado en contra de su asociado principal en la negociación: el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica (ANC). A través de operaciones encubiertas llevadas a cabo por la policía y la milicia sudafricanas, y con financiación secreta al Partido Inkatha de la Libertad, el Gobierno del Presidente De Klerk ha estado aplicando un programa doble. En el mejor de los casos, el Gobierno de Sudáfrica ha dado pruebas de estar en connivencia con el Inkatha en un intento por manipular el equilibrio del poder entre el Inkatha, el Partido Nacional y el ANC. En el peor de los casos, puede probarse que el Gobierno ha estado directamente involucrado en los actos brutales de violencia que han costado más de 1.700 vidas sólo en este año.

Entre tanto, los gobiernos foráneos, como el de los Estados Unidos, están apurándose para levantar las sanciones antes de que la buena fe del Gobierno sudafricano quede claramente establecida.

Quizás lo más importante es que el telón de fondo contra el que el Partido Nacional y los dirigentes activistas contra el apartheid se están sentando ahora a negociar, está manchado con la inestabilidad nacida de la violencia - violencia para la que hay abundantes pruebas de la participación de la policía sudafricana. La aparición de estas tendencias, junto con la intransigencia del Gobierno respecto de otros problemas de larga data, plantean serias amenazas al éxito de la próxima conferencia de todas las partes. Existen todavía serios obstáculos en el camino.

En mi declaración escrita, la que habré de entregar para constancia, hago una somera evaluación del grado en el cual el Gobierno sudafricano ha cumplido los requisitos para las negociaciones establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Sudáfrica, aprobada por consenso en el decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, sobre el apartheid. Luego paso a describir el proceso que esas negociaciones habrán de seguir dentro de uno o dos años. Finalmente, analizo las propuestas anticonstitucionales del Partido Nacional.

Sin embargo, en el poco tiempo de que dispongo para esta presentación oral quisiera concentrarme en lo que en este momento es, a nuestro juicio, el principal obstáculo al progreso, o sea la violencia que actualmente se extiende en Sudáfrica.

En lugar de tener un ambiente propicio a la participación política, la violencia ha creado un ambiente dominado por el miedo. En las condiciones actuales, los nuevos derechos establecidos, surgidos a raíz del levantamiento de las restricciones sobre personas y organizaciones, están siendo socavados por una población demasiado temerosa de ejercerlos. El costo en muertes sólo para este año es de 1.745, con más de 2.000 heridos, según se ha informado.

Lo que hace que el problema de la violencia sea tan difícil de resolver es su aspecto multifacético. Por una parte está la llamada lucha entre facciones, pero con respecto a la cual hay abundante información sobre la participación de la policía. Las bajas en este tipo de violencia generalmente se dan entre ciudadanos ordinarios. En el otro lado del espectro están los asesinatos por escuadrones mercenarios altamente organizados, sobre todo de prominentes líderes políticos. La gama de participantes en la violencia se extiende desde las fuerzas del Gobierno hasta la población civil de negros y blancos, incluyendo a grupos de extremistas blancos del ala derecha. Además, mientras que en el pasado había la apariencia de que los objetivos de la violencia se escogían sobre la base de su afiliación política, recientemente ha surgido un patrón de violencia totalmente indiscriminada que ha llevado a una desestabilización más generalizada en las barriadas populares.

Varios incidentes ocurridos recientemente dan evidencia nueva de la participación de la policía. En un caso, se informó de la muerte de más de 100 personas en un conflicto que aparentemente llevó a dos asociaciones rivales de choferes de taxis a enfrentarse una a la otra. Una asociación está alineada con la ANC y la otra con el Inkatha. La escena de este conflicto se parecía más bien a un sitio donde ha caído una bomba y no a un barrio residencial, después de una noche durante la cual 200 barracas fueron quemadas, dejando a 78 personas sin hogar y 11 muertos.

Treinta y seis testigos han presentado declaraciones juradas que vinculan a funcionarios de policía con la violencia. Los informes sobre instigación e inacción por parte de la policía se han hecho demasiado numerosos como para descartarlos como invenciones. En otro incidente,

"Siete miembros de la policía sudafricana están siendo enjuiciados ahora por el asesinato de 11 residentes de una zona conocida como Trust Feed, el 3 de diciembre de 1988. El testigo principal en el caso, que en estos momentos está pendiente en la Corte Suprema de Sudáfrica, en la División Provincial de Natal, es un dirigente del Inkatha que ha testificado que él participó con los funcionarios de policía acusados en una conspiración para matar a residentes de Trust Feed que desafiaran la autoridad de los dirigentes del Inkatha."

Además de las sospechas de confabulación de la policía en la violencia de las barriadas populares, han surgido alegaciones fiables contra escuadrones de la muerte de la policía y del ejército que han atacado a activistas destacados de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica e incluso hasta en Francia. Si bien una comisión de encuesta del Gobierno, la Comisión Harms, absolvió al Gobierno de Sudáfrica de culpabilidad por las más de 60 muertes investigadas, concluyó que había pruebas suficientes como para enjuiciar a esos miembros de escuadrones de la muerte militares en un asesinato y como para proseguir la investigación de otros tres asesinatos planeados. Según la Comisión de Derechos Humanos con base en Johannesburgo sólo durante este año ha habido ataques de escuadrones de choque que provocaron 46 muertos y 34 heridos; más de 60 personas han sido asesinadas durante los últimos 18 meses. En el corto período de junio a septiembre de 1991 se cometieron 33 asesinatos en los que se sospecha que participaron escuadrones de la muerte, y cuyas víctimas fueron fundamentalmente miembros del Congreso Nacional Africano (ANC).

Durante una encuesta judicial actualmente en curso sobre el asesinato el 25 de febrero de 1991 del Jefe Maphumulo, un jefe zulú leal al ANC, un ex miembro de las fuerzas de seguridad sudafricanas ha admitido haber llevado a cabo ese asesinato en cumplimiento de una orden de la policía de seguridad. El testigo, el oficial Lucky James Mntambo, testificó que él había participado en un ataque armado a la casa del Jefe Maphumulo. El ataque implica a miembros del Inkatha y de la policía. Mntambo también declaró cómo él y otros

policías, siguiendo instrucciones de sus superiores, tomaron medidas para ocultar sus identidades utilizando máscaras de esquiar y acoplando bolsas a sus fusiles AK-47 para que no quedaran cartuchos gastados como prueba de la participación de la policía. Al margen de la encuesta judicial, Mntambo dijo a los periodistas que desde que entró en la Sección de Seguridad en 1988 ha tomado parte en ataques de escuadrones de choque que provocaron la muerte de al menos 15 personas. Las víctimas, dice, fueron siempre gente del ANC. Además, admitió formar parte de un grupo dirigido por un capitán de policía que mató al hombre que había sido el conductor del Jefe Maphumulo el día anterior a la comparecencia y testificación de ese conductor en la encuesta judicial. El juicio en esa encuesta está aún pendiente.

El Acuerdo de Paz Nacional, firmado el 14 de septiembre de 1991, ha sido elogiado como un intento serio de acabar con la violencia. El Acuerdo exige la observancia por todas las partes de un código de conducta política y regula además la conducta de la policía y de las fuerzas de seguridad en el contexto de reuniones y manifestaciones políticas. Aunque los objetivos contenidos en el Acuerdo son loables, han surgido graves problemas en su aplicación. Desde la firma han sido asesinadas más de 200 personas. Hay informes por doquier acerca de violaciones del Acuerdo por la policía sudafricana y acerca del fracaso del Gobierno en educar a las fuerzas de seguridad y al público en general en cuanto a su contenido. También ha habido quejas de que la policía no ha vigilado los trenes suburbanos, que han sido escena de diversos ataques brutales. Desde el Acuerdo de Paz ha habido 16 muertos en 11 ataques en trenes suburbanos. Parece que la policía patrulló las estaciones durante un corto período de tiempo, y durante ese período disminuyó el número de ataques, pero desde que las patrullas cesaron la violencia ha comenzado de nuevo.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Sudáfrica afirma:

"Consideramos que es indispensable crear un clima propicio para las negociaciones. Urge responder positivamente a esa demanda universal ..."

(S-16/1, anexo, párr. 5)

Lejos de contribuir al clima que se pide en la Declaración de las Naciones Unidas, la reciente oleada de violencia lo socava significativamente y prueba que el Gobierno sudafricano no está cumpliendo sus responsabilidades, ni siquiera las que tenía antes de la firma del Acuerdo de Paz.

Evidentemente el Gobierno debe abstenerse de librar una guerra contra sus propios ciudadanos utilizando sus fuerzas de seguridad. Si el Gobierno no está orquestando la violencia y los funcionarios de policía están actuando independientemente, entonces el Gobierno tiene la obligación positiva de tomar medidas que aseguren el mismo control sobre los elementos delincuentes de sus propias fuerzas que el que tenía en el pasado sobre los que se oponían al apartheid. Debe insistir para que todos los miembros encargados de ejecutar la ley en su Gobierno mantengan el orden público de manera responsable mediante una investigación competente y unos procesos judiciales rigurosos.

Sr. AL-KINDI (Emiratos Arabes Unidos) (interpretación del árabe): El Sr. Joseph Reilly, de la Progressive Librarians' Guild afirmó que mi país participaba en ciertas actividades. El dijo que poseía información, y me gustaría decir que su información es errónea y que carece de fundamento en lo que respecta a mi país. Nosotros respetamos todos los acuerdos que prohíben las relaciones y el comercio con Sudáfrica, y quiero que se aclare ese punto.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Hemos escuchado al último orador en nuestra lista. La Comisión Política Especial ha concluido así su examen del tema 37 del programa. Nuestro Relator presentará el informe de la Comisión a la Asamblea General.

En nuestra próxima sesión, mañana viernes 15 de noviembre de 1991, a las 10.00 horas en la Sala de Conferencias 2, empezaremos nuestro examen del tema 72 del programa, "Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente".

Se levanta la sesión a las 16.50 horas.